

Ano 1 • Edição 03 • Setembro 2020

Informativo LGPD

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

**PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO DA BAHIA**



EDITORIAL

A edição deste mês, além de publicar o artigo do acadêmico espanhol Juan Pablo Murga, está repleta de novidades. Integram a edição do mês de setembro, Indicações de estudo, atualidades jurídicas, como também o convite a reflexão do leitor sobre as interfaces da LAI e a LGPD. Ambas têm diretrizes voltadas ao tratamento da informação, uma com o enfoque na transparência, e a outra pautada na confidencialidade e integridade dos dados pessoais. A leitura conjunta das normas conduz a necessidade de garantir transparência pública alinhada aos princípios da prevenção e da segurança dos dados pessoais. Nesta perspectiva, com fundamento na LAI e na LGPD, o processo de tratamento de dados pessoais (coleta, uso, armazenamento, descarte) deve garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados aos interessados. Observa-se que não existe uma superioridade de uma lei sobre a outra, mas a seguinte particularidade: uma visa garantir o acesso à informação; e a outra busca assegurar a privacidade dos dados pessoais. Desta forma, nota-se que as leis, apesar de suas peculiaridades, mais contribuem para a proteção de dados pessoais comuns e especiais do que se repelem.

Boa leitura.

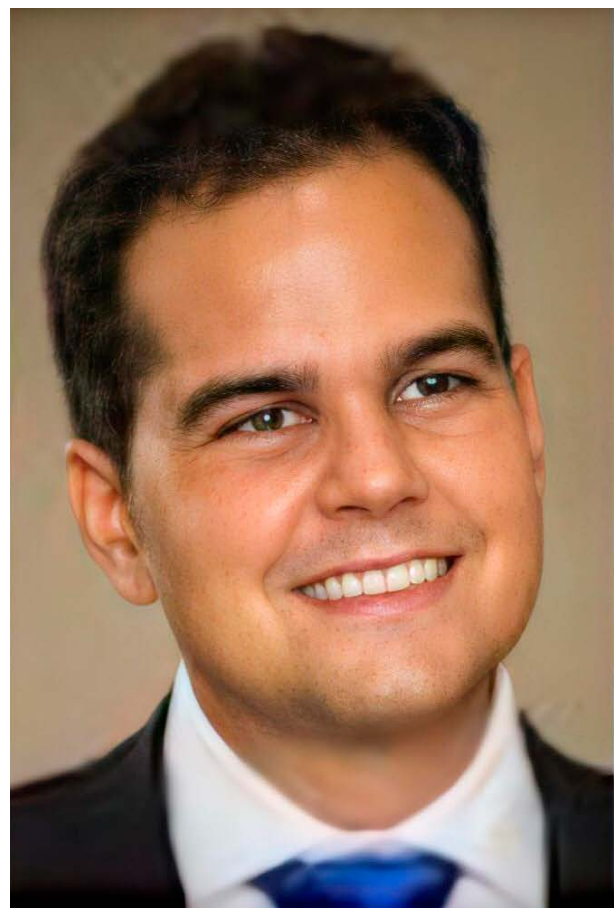
EL DERECHO AL OLVIDO DIGITAL EN EUROPA

Prof. Dr. Juan Pablo Murga Fernández (Universidad de Sevilla)

Internet ha supuesto la mayor revolución de la humanidad en los últimos siglos. El almacenamiento y el intercambio globalizado y prácticamente ilimitado de datos, la posibilidad de comunicarse de forma instantánea desde cualquier parte del globo terráqueo, en conjunción con el prolífico desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han marcado un antes y un después en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo sin distancias en lo tecnológico, plenamente interconectado donde el acceso a la información sobre cualquier ámbito está al alcance de un solo clic. Para ello, empleamos casi a diario los motores de búsqueda universales, donde juega un papel predominante y casi monopolístico Google. Esta nueva realidad llena de ventajas con la que convivimos y de la que nos beneficiamos conlleva, no obstante, una multiplicidad de riesgos y de grandes incertidumbres a las que el Derecho ha de dar respuesta. En efecto, centrándonos en el acceso universal a la infinidad de datos almacenados, derechos fundamentales básicos como la intimidad, el honor o la propia imagen pueden verse fácilmente vulnerados, resultando muy difícil la determinación de un responsable.

Piénsese igualmente en la publicación de una noticia veraz sobre la comisión de un delito por parte de un sujeto plenamente rehabilitado, que transcurridos veinte años sigue quedando vinculado a la misma al incluir sus datos en un buscador. Ciertamente, los ya anunciados exponenciales avances de las tecnologías de la información y comunicación provocan que factores tradicionales como el tiempo y la distancia no traigan consigo el olvido, de manera que cualquier persona que tenga acceso a la red, con independencia del lugar donde se encuentre y del tiempo que haya transcurrido, pueda acceder a cualquier documento, noticia o referencia que haya tenido acceso alguna vez al universo digital. Crear un perfil de una determinada persona resulta tan fácil como teclear su nombre y apellidos en Google y en ese preciso instante aparecerán en pantalla una multitud de enlaces que contendrán no sólo aspectos positivos relativos a la misma, sino también aquellos que pueden causar un evidente daño en la intimidad o reputación.

En este contexto surge el novedoso “derecho al olvido”, consistente en la posibilidad de solicitar que en determinados casos se cancelen datos personales que circulan por Internet ante el riesgo que ello supone en la vulneración de los derechos de la personalidad (particularmente, los derechos al honor e intimidad). Hasta la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos en 2016 se trataba de un derecho no tipificado legalmente. El actual art. 17 del referido Reglamento comunitario configura normativamente este novedoso derecho con carácter expreso por primera vez; y la LOPDGDD española lo desarrolla en los arts. 93 y 94, el primero en relación con las búsquedas de Internet, y el segundo en



JUAN PABLO MURGA FERNÁNDEZ

*Professor Doutor de Direito Civil da
Universidade de Sevilla (Espanha).*

*Doutor em Direito pelas Universidades
de Bolonha (Itália) e Sevilla. Co-diretor
y docente do Curso de Especialização
“Delegado de Proteção de Dados” da
Universidade de Sevilla.*

relación con las redes sociales. Con anterioridad su reconocimiento vino dado en sede jurisprudencial, con la señera sentencia sobre el caso “Google Spain” (de 13 de mayo de 2014), donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo reconoció y extendió su aplicación a los motores de búsqueda universales, por entender que la actividad de un motor de búsqueda, al consistir en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente, y ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, se puede calificar de “tratamiento de datos personales”, cuando esa información contiene datos de ese tipo. Además, debido a que el motor de búsqueda determina los fines y medios del tratamiento de tales datos personales, el Tribunal estima que debe considerarse “responsable” de dicho tratamiento, a pesar de que los editores de páginas web posean protocolos de exclusión como robot.txt y códigos como noindex y noarchive que permiten evitar el indexado de enlaces.

Una de las mayores controversias que suscita el derecho al olvido es la determinación de sus límites, pues el derecho al olvido, como ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina, no puede traducirse en el derecho a construir un pasado a la medida de cada interesado. El estudio de los límites al derecho al olvido supone, entre otros aspectos, adentrarse en los requisitos necesarios para el válido ejercicio del derecho y en la clásica ponderación de los derechos y libertades públicas concurrentes. Operación de ponderación que, como bien apunta el Prof. ALEXY, no es un procedimiento que, en cada caso, conduzca exactamente a un resultado, pues el peso de los bienes jurídicos en conflicto no es determinable en sí mismo o absolutamente, sino que sólo lo es de forma relativa, conforme a un supuesto de hecho concreto. En este sentido, por lo que respecta a los elementos que debemos tomar en consideración para determinar los límites al ejercicio del derecho al olvido y su ponderación con otros derechos y libertades fundamentales (esencialmente, las libertades de expresión y acceso a la información), entendemos que deben ser los siguientes (nos inspiramos en SANCHO LÓPEZ a este respecto):

1. *La naturaleza del sujeto afectado:* es evidente que los personajes públicos, por la relevancia que tienen sus actos para la formación de la opinión pública, tienen la obligación de soportar una mayor publicidad de sus actos así como de las informaciones relativas a su persona, por lo que en dichos supuestos, la libertad de expresión e información goza de una “posición preferente”. No obstante, incluso estos sujetos podrían ejercitar el derecho al olvido -aunque no con la misma amplitud- cuando, por el transcurso del tiempo, dichas informaciones ya no se ajusten a la situación real y no resulten relevantes para la sociedad en general.

2. *El carácter público o privado de la información:* debe tenerse en cuenta si la información sobre la que pretende ejercitarse el derecho al olvido es de carácter público, pues deben ponderarse los propósitos que se persiguen con la publicidad de la información administrativa -la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho de acceso a la información (art. 105.b) CE)- y el alcance de la protección de datos personales y del derecho al olvido en cada caso. Parece lógico sostener que, aunque estén contenidos dentro de fuentes públicas, a veces, los datos personales no deberían ser publicados si de la ponderación del derecho a la protección de datos con el derecho de acceso a la información administrativa, se deriva que el segundo puede ser igualmente efectivo con una menor afectación del primero. Debe afirmarse la posibilidad de su ejercicio sobre información pública, principalmente en relación a las versiones digitales de los boletines oficiales que, en muchas ocasiones, pueden comportar una publicidad desproporcionada de información personal de carácter sensible. Este es el caso de las resoluciones judiciales y los expedientes de antecedentes penales, sobre los cuales el Tribunal Supremo español ha manifestado el carácter lesivo que para la dignidad e indemnidad personal pueden comportar en determinados casos.

3. *El factor tiempo:* este, sin duda, es el elemento de ponderación más determinante para el ejercicio del derecho al olvido; el tiempo transcurrido desde la publicación de la información lesiva y el momento en que se ejercita el derecho al olvido. Pues, como indica claramente la LOPDGDD, la información relativa a esa persona deviene inadecuada, no pertinente o excesiva, por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron tales datos.

En definitiva, a través del derecho al olvido puede conseguirse que el efecto natural del paso del tiempo (el olvido...) llegue también al mundo digital.

O DIREITO AO ESQUECIMENTO DIGITAL NA EUROPA

Prof. Dr. Juan Pablo Murga Fernández (Universidad de Sevilla)

A Internet tem sido a maior revolução da humanidade nos últimos séculos. O armazenamento e o intercâmbio globalizado e praticamente ilimitado de dados, a possibilidade de comunicação instantânea de qualquer parte do globo, em conjunto com o abundante desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação marcam um antes e um depois em nossa sociedade. Vivemos em um mundo sem distâncias tecnológicas, totalmente interconectado, onde o acesso às informações de qualquer campo está ao alcance de um clique. Para fazer isso, empregamos motores de busca universais quase diariamente, no qual o Google desempenha um papel predominante e quase monopolista. Esta nova realidade cheia de vantagens com que vivemos e das quais nos beneficiamos, comporta, no entanto, uma multiplicidade de riscos e grandes incertezas aos quais o Direito deve responder. Na verdade, ao focar no acesso universal a uma infinidade de dados armazenados, direitos fundamentais básicos como a privacidade, a honra ou a própria imagem podem ser facilmente violados, dificultando muito a definição de um responsável.

Há que se pensar também na publicação de uma notícia verídica sobre o cometimento de um crime por um sujeito totalmente reabilitado, que após vinte anos continua vinculado a ele na medida que seus dados são incluídos em um mecanismo de busca. Certamente, os avanços exponenciais já anunciados das tecnologias da informação e comunicação fazem com que fatores tradicionais como o tempo e a distância não tragam consigo o esquecimento, de maneira que qualquer pessoa que tenha acesso à rede, independentemente do lugar que se encontre e do tempo já transcorrido, possa acessar qualquer documento, notícia ou referência que alguma vez tenha ingressado no universo digital. Criar o perfil de uma determinada pessoa é tão fácil quanto digitar seu nome e sobrenome no Google e naquele exato momento aparecerá uma infinidade de links na tela que conterão não apenas aspectos positivos relacionados a ela, mas também aqueles que podem causar danos evidentes à privacidade ou reputação.

Neste contexto, surge o novo “direito ao esquecimento”, que consiste na possibilidade de requerer que em certos casos os dados pessoais que circulam na Internet sejam cancelados pelo risco que isso acarreta na violação de direitos da personalidade (notadamente, os direitos à honra e à privacidade). Até a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados em 2016, se tratava de um direito não tipificado. O atual artigo 17 do referido Regulamento Comunitário ao prevê-lo expressamente, conforma legalmente este novo direito pela primeira vez; e a espanhola LOPDGDD o desenvolve nos artigos 93 e 94, o primeiro em relação às buscas na Internet e o segundo em relação às redes sociais. Anteriormente, o seu reconhecimento era dado em sede jurisprudencial, com a decisão histórica no caso “Google Espanha” (de 13 de maio de 2014), onde o Tribunal de Justiça da União Europeia o reconheceu e estendeu sua aplicação aos motores de busca universal, por entender que a atividade de um motor de busca, consistente em encontrar informação publicada ou colocada na Internet por terceiros, indexá-la automaticamente, armazená-la temporariamente e colocá-la à disposição dos utilizadores da Internet segundo uma determinada ordem de preferência, pode ser qualificada como “tratamento de dados pessoais”, quando essa informação contiver este tipo de dado. Além disso, uma vez que o motor de pesquisa determina as finalidades e meios de tratamento desses dados pessoais, o Tribunal entende que o motor de busca universal deve ser considerado “responsável” por esse tratamento, apesar dos editores de páginas web terem protocolos de exclusão como robôs. txt e códigos como noindex e noarchive que permitem evitar links de indexação.

Uma das maiores polêmicas levantadas pelo direito ao esquecimento é a determinação de seus limites, uma vez que o direito ao esquecimento, como reiteraram a jurisprudência e a doutrina, não pode ser traduzido no direito de construir um passado de acordo com os respectivos interesses. O estudo

dos limites do direito ao esquecimento envolve, entre outros aspectos, o aprofundamento dos requisitos necessários para o exercício válido do direito e a ponderação clássica dos direitos e liberdades públicas concorrentes. A operação de ponderação que, como aponta o Prof. ALEXY, não é um procedimento que, em cada caso, conduza exatamente a um resultado, uma vez que o peso dos bens jurídicos em conflito não é determinável em si ou de forma absoluta, mas apenas de maneira relativa, de acordo com uma situação de fato concreta. Nesse sentido, no que se refere aos elementos que devemos levar em consideração para determinar os limites do exercício do direito ao esquecimento e sua ponderação com outros direitos e liberdades fundamentais (essencialmente, as liberdades de expressão e de acesso à informação), entendemos que devam ser as seguintes (inspiramo-nos em SANCHO LÓPEZ a este respeito):

1. *A natureza do sujeito afetado:* é evidente que as figuras públicas, pela relevância de suas ações para a formação da opinião pública, têm a obrigação de promover maior divulgação de suas ações, bem como das informações relacionadas à sua pessoa. Portanto, em tais casos, a liberdade de expressão e informação goza de uma “posição preferencial”. Não obstante, estes sujeitos poderiam exercer o direito ao esquecimento - embora não na mesma medida - quando, com o passar do tempo, tais informações deixassem de se adequar à realidade e não fossem relevantes para a sociedade em geral.

2. *O carácter público ou privado da informação:* deve-se ter em consideração se a informação sobre a qual se pretende exercer o direito ao esquecimento é de natureza pública, devendo ser ponderados os fins perseguidos com a publicidade da informação administrativa - segurança jurídica (art. 9.3 CE) e o direito de acesso à informação (art. 105.b) CE) - e o âmbito da proteção dos dados pessoais e do direito ao esquecimento em cada caso. Parece lógico sustentar que, embora estejam contidos em fontes públicas, por vezes, os dados pessoais não devem ser publicados se da ponderação do direito à proteção de dados com o direito de acesso à informação administrativa, se conclui que o segundo pode ser igualmente eficaz com menor afetação do primeiro. Deve-se afirmar a possibilidade de seu exercício sobre informações públicas, principalmente em relação às versões digitais dos diários oficiais que, em muitas ocasiões, podem levar à publicidade desproporcional de informações pessoais sensíveis. É o caso das decisões judiciais e dos autos sobre os antecedentes criminais, sobre os quais o Supremo Tribunal Espanhol declarou o carácter lesivo à dignidade e à integridade pessoal que podem acarretar em certos casos.

3. *O fator tempo:* este, sem dúvida, é o elemento de ponderação mais decisivo para o exercício do direito ao esquecimento; o tempo decorrido desde a publicação da informação prejudicial e o momento em que o direito ao esquecimento é exercido. Pois bem, como a LOPDGDD indica claramente, a informação relativa a essa pessoa torna-se inadequada, irrelevante ou excessiva, pelo decorrer do tempo, considerando as finalidades para as quais tais dados foram recolhidos ou tratados.

Em suma, através do direito ao esquecimento pode-se alcançar que o efeito natural da passagem do tempo (esquecimento ...) também chegue ao mundo digital.

¹ LOPDGDD - Lei Orgânica de Proteção de Dados e Garantias Digitais.

² CE - Constituição Espanhola de 1978.

PGE PROMOVE WEBINAR SOBRE ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE A LAI E A LGPD

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia realizou, no dia 18 de agosto, mais um webinar sobre Proteção de Dados na Administração Pública. Desta vez, o tema foi 'LAI e LGPD: encontros e desencontros'.

A atividade teve como palestrantes o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, José Aras, e a procuradora chefe da Procuradoria Administrativa da PGE-BA, Bárbara Camardelli. A também procuradora do Estado da Bahia, Georgina Castro mediu o debate.

Durante o evento foram debatidas questões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e a Lei de Acesso à Informação (LAI).

O DEBATE

Durante sua explanação, a procuradora Bárbara Camardelli respondeu a indagação da mediadora, quanto ao papel da LGPD, se veio para complementar e melhorar o acesso à informação ou se servirá de desculpa para não dar transparência aos gastos públicos.

Camardelli afirmou que tanto a LAI como a LGPD são boas normas e que devem ser interpretadas no conjunto. "A boa ou má aplicação das leis dependerá dos seus intérpretes, que deverão buscar a proporcionalidade dos interesses a proteger", destacou.

A procuradora explicou ainda que a LGPD é muito mais contundente ao tentar proteger o que seria a informação pessoal e que o rol do que ela traz como informação pessoal se tornou mais descritivo.

"Passa-se a exigir a devida motivação para divulgar informações pessoais". Apontou também como uma diferença entre as leis o fato de a LGPD impor uma política de tratamento de dados.

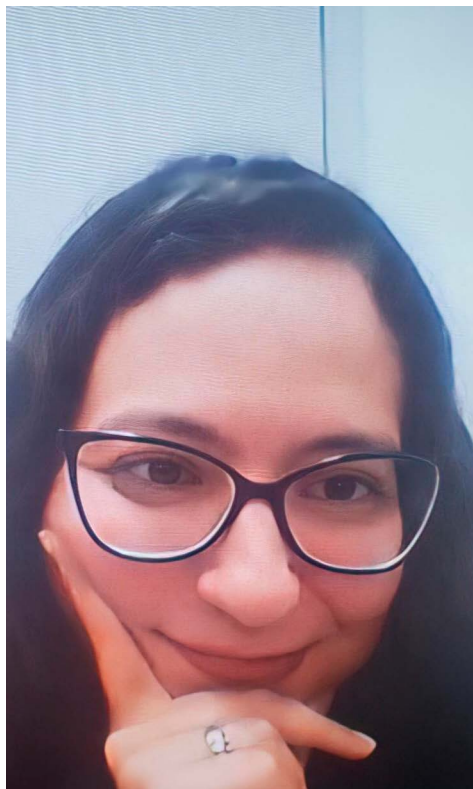
O desembargador José Aras, por sua vez, afirmou que o mundo vive hoje uma era marcada pela importância dos dados pessoais e que as leis (LAI e LGPD) vêm para se compatibilizar.

"Acredito que nossa sociedade vai evoluir para adequar esta visão digital, de uma nova era, a algo que seja também de respeito à intimidade".

"A Lei Geral de Proteção de Dados procura conciliar a noção de autodeterminação com a ideia da supremacia do interesse público sobre o interesse privado", destacou o magistrado, afirmando ainda que a LGPD vem basicamente para proteger o sigilo dos dados pessoais e que pecou em não proteger dados de pessoas jurídicas.

Reproduções	Picos simultâneos	Novos inscritos
285	100	10
Duração	Tempo total de exibição	Tempo médio de exibição
1:06:43	3 dias	19:13

OS PALESTRANTES



GEORGINA CASTRO

Procuradora do Estado da Bahia pós graduada em direito aplicado ao Ministério Público pela ESMPU.



JOSÉ ARAS

Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, professor, autor de livros e consultor pedagógico do CEJAS.



BÁRBARA CAMARELLI

Procuradora chefe da Procuradoria Administrativa da PGE/BA. Professora da UCSAL- Faculdade de Direito- Direito Civil. Especialista em Direito de Infraestrutura Publica pela FGV. Possui MBA em Parcerias Público-Privadas pela Fundação ESMPU Escola de Sociologia e Políticas De São Paulo.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SERÁ TEMA DA SEXTA LIVE PROMOVIDA PELA PGE E TCE

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Administração Pública: desafios técnicos e jurídicos' será o tema da próxima live promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (CEA) e a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), do Tribunal de Contas do Estado Bahia. O evento, que acontece no próximo dia 9, às 15h, através dos canais do TCE e da Escola Virtual da PGE no YouTube, é o sexto de uma série de outros que têm sido realizados quinzenalmente pelos órgãos para falar sobre Políticas Públicas – A Arte do Encontro. É gratuito, com certificação e as inscrições podem ser realizadas no site www.tce.ba.gov.br/eventos.

Nesta edição, a live terá como palestrantes a procuradora do Estado da Bahia Renata Fabiana Santos Silva e o diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Wallace da Silva Pereira. A mediação ficará a cargo da Procuradora do Ministério Público de Contas do TCE/BA, Camila Luz de Oliveira.

6ª edição **POLÍTICAS PÚBLICAS A ARTE DO ENCONTRO**

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DESAFIOS TÉCNICOS E JURÍDICOS

9/9, quarta-feira, às 15h

Wallace da Silva Pereira (TCE/SC)

Renata Fabiana S. Silva (PGE/BA)

Camila Luz de Oliveira (MPC - TCE/BA)

Transmissão nos canais do YouTube do TCE/BA e da Escola Virtual - PGE/BA

EVENTO GRATUITO COM CERTIFICAÇÃO

Inscrições: www.tce.ba.gov.br/eventos

PGE **CEA** **ECPL** **TCE**



ATUALIDADES JURÍDICAS

Política de Proteção de Dados Pessoais do Estado de Pernambuco

- Decreto nº 49.265, de 06 de agosto de 2020: Institui a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual em consonância com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). [Clique aqui para acessar.](#)

Compartilhamento de dados do Sisbin

- ADI 6529: Estabelece limites ao compartilhamento de dados do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). [Clique aqui para acessar.](#)

Dossiê antifascista

- **ADPF 722:** Suspende ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento antifascista. [Clique aqui para acessar.](#)

DECRETO Nº 10.474, DE 26 DE AGOSTO DE 2020

- Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. [Clique aqui para acessar.](#)

Vigência LGPD

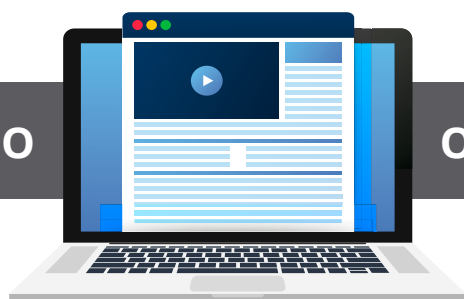
- Medida Provisória nº 959/2020 - Aprovada pelo Senado Federal, contudo o art. 4º, que adiava o início da vigência da LGPD, foi considerado prejudicado. A entrada em vigor ocorrerá com a sanção ou veto presidencial dos demais dispositivos da MP nº 959/2020. [Clique aqui para acessar.](#)

FIQUE POR DENTRO



ESTUDO

ONLINE



Aqui vão nossas sugestões de materiais gratuitos de estudo disponíveis online, para que você fique por dentro das principais questões envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados

Clique para acessar

- **Guia de boas práticas - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD - Governo Federal**
- **Roteiro de Atuação - Sistema Brasileiro de Proteção e Acesso à dados pessoais: Análise de dispositivos da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Identificação Civil, da Lei do Marco Civil da Internet e da Lei Nacional de Proteção de Dados - Ministério Público Federal**

ATENÇÃO!

Chamada de artigos jurídicos para publicação na Revista APEB, Ano II - 2020, com a temática: Administração Pública e a Lei Geral de Proteção de Dados.

Prazo: 21.09.2020

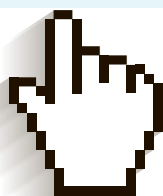
Acesse aqui

Clique no e-mail para enviar

DÚVIDAS OU SUGESTÕES?

Fale conosco:

protecaodedados@pge.ba.gov.br



GRUPO DE TRABALHO

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA - PA
Coordenadora - Renata Fabiana Santos Silva
Titular - Patrícia Lima Dória
Suplente - Roberto Rodrigo Vieira Pereira

PROCURADORIA FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA - PROFIS
Titular - Cláudia Magalhães Guerra Attiná
Suplente - Bruno Cunha Costa

COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO - CDA
Titular - André Thadeu Franco Bahia
Suplente - Luis Otávio Rodrigues Lima Filho

COORDENAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CGE
Titular - Eduardo Jorge Rodrigues Brandão
Suplente - Anízio Góes da Silva Júnior

DIRETORIA GERAL - DG
Titular - Hilda Cunha Kahn
Suplente - Ana Falcão de Azevedo Souza

PROCURADORIA DO INTERIOR - PROIN
Titular - Hugo Coelho Régis
Suplente - Eduardo Maia Carneiro

PROCURADORIA JUDICIAL - PJ
Titular - Têssio Rauff de Carvalho Moura
Suplente - Iuri Ribeiro Gonçalves

PROCURADORIA DE CONTROLE TÉCNICO - PCT
Titular - Antônio Ernesto Leite Rodrigues
Suplente - Arisângela Blanco Rosas

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI
Titular - Fernanda Berg
Suplente - Francisco Bruno Pereira

ELABORAÇÃO E LAYOUT

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM
Coordenadora - Waldimara Silva Santana
Designer - Mônica de Lima Santiago